

**Benito Juárez**

***Documentos,  
Discursos y Correspondencia***

**Tomo 11, capítulo CXCVI**

Selección y notas de  
**Jorge L. Tamayo**

Edición digital coordinada por  
**Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva**

Tomo revisado y anotado por  
**María del Carmen Berdejo Bravo**

Versión electrónica para su consulta  
**Aurelio López López**



**Año 2006**

# **Tomo 11, capítulo CXCVI**

**Anotado y revisado por  
María del Carmen Berdejo Bravo  
(UAM Azcapotzalco)**

## **Capítulo CXCVI**

**Se inicia el litigio de Chamizal;  
Interesante comunicación  
de Domingo Sarmiento**

**Octubre y noviembre de 1866**

## **CAPÍTULO CXCVI**

### **SE INICIA EL LITIGIO DEL CHAMIZAL; INTERESANTE COMUNICACIÓN DE DOMINGO SARMIENTO**

**Octubre y noviembre de 1866**

El Tratado de Paz y Amistad, celebrado con los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, que formalizó la pérdida del 51% de nuestro territorio, fijó los límites con nuestro vecino del norte, estableciendo como parte de ellos la línea media del curso del Río Bravo, también llamado Grande, desde un punto a tres leguas de su desembocadura hasta cruzar con el lindero meridional de Nuevo México, lo que ocurre enfrente de Ciudad Juárez (antes Paso del Norte), en un punto bien precisado.

El Tratado de la Mesilla, del 30 de diciembre de 1853, no modificó esta parte del lindero, de manera que subsistía como límite el Río Bravo frente a Paso del Norte, hace cien años.

Pronto se hizo notar el carácter errático del cauce en numerosos tramos, lo que decidió a ambos gobiernos precisar y amojonar sobre el terreno la posición de la corriente. Como este trabajo fue laborioso y no se dispuso de numeroso personal, requirió muchos años para concluirlo. Se inició en 1848 y en el valle de Paso del Norte se ejecutó en 1852, por los ingenieros Salazar Ilarregui por México y Emory por los Estados Unidos.

Tanto los vecinos de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, como los de Franklin, hoy El Paso, observaron los movimientos del cauce y resintieron desde luego algunos trastornos y molestias.

Para 1866 las diferencias en la apreciación de los cambios de situación relativa de algunos terrenos, provocados por una injusta posición de las autoridades de Franklin, motivaron que el jefe político del

distrito de Bravos, presentara oficialmente los hechos al gobernador de Chihuahua el 17 de noviembre, quien planteó el problema al gobierno nacional de inmediato. El documento preparado por el jefe político es conciso, preciso y sustenta una tesis justa y racional.

El gobierno federal, con sede en Chihuahua, trasmite pocos días después al ministro en Washington ese documento.

Sebastián Lerdo de Tejada emite, desde luego, la opinión de que los cambios por depósitos de aluvión y socavación lenta no son reclamables, en cambio "no es posible dejar de considerar los cambios visibles e importantes causados por la fuerza del río".

Pide a Romero ausculte la opinión del gobierno estadounidense, para estar en condiciones de "promoverse lo que fuera oportuno con motivo de los casos que ya han ocurrido y que fácilmente pueden seguir ocurriendo, por la naturaleza del terreno en que corre el Río Grande".

Con seguridad las autoridades locales estadounidenses se dieron cuenta de este problema con anterioridad y lo hicieron llegar a funcionarios superiores, pues el secretario del Interior hizo, en 1856, una consulta al procurador general, quien contesta en documentado estudio que reproducimos, señalando la diferencia entre "cambios graduales del curso de un río por accesión insensible y cambios que acaecen por la absoluta mutación de ese curso, produciendo separación de tierra de uno a otro territorio".

Matías Romero trasmite, el 9 de enero, la nota de Sebastián Lerdo de Tejada, que es contestada por el secretario Seward el 5 de febrero siguiente, remitiendo copia del dictamen del procurador general, Caleb Cushing en 1856, agregando que ese documento "contiene los principios que profesa el gobierno de los Estados Unidos a este respecto".

Al enterarse Matías Romero de esa opinión, se apresura a apoyarla y envía copia del texto al gobierno.

Este proceso erosivo continuó, por lo que el curso del río cambió no sólo frente a Paso del Norte, sino también en otros lugares, dando motivo a frecuentes incidentes entre los ribereños, a consecuencia de que algunas porciones del río, al cambiar de curso, quedaban en diferente territorio.

Por ello, en las siguientes décadas ambos gobiernos estudiaron las controversias motivadas por los movimientos, "discutieron los principios jurídicos aplicables y celebraron los tratados adecuados para resolverlas".<sup>1</sup>

El 12 de noviembre de 1884 se firmó, también en Washington, una nueva convención que ratificó que el límite, en la parte en que lo constituyen los ríos Bravo y Colorado, quedaría definido por la línea media del canal más profundo y, para juzgar de los movimientos del río, se estableció el criterio de considerar que, si la modificación se producía por corrosión continuada, la ribera erosionada perdía terreno y el depósito quedaba a favor de la otra ribera, se movería la frontera de suerte que quedara en la línea media del canal más profundo. En cambio, si la modificación había sido violenta, el banco conservaría la nacionalidad original si tenía más de 250 hectáreas de superficie y más de 200 habitantes; en el caso de que el área o la población fueran inferiores, pasaba el banco a formar parte del territorio del país de cuyo lado hubiera quedado y se respetaría la propiedad privada y la nacionalidad de los habitantes.

Para aplicar esa convención y los tratados en vigor, se creó en 1889 la Comisión Internacional de Límites, constituida por una sección de cada país y encabezada por un representante denominado comisionado.

El caso contencioso de El Chamizal, que hemos visto, surgió desde 1852 y se presentó a la Comisión de Límites hasta el 28 de septiembre de 1894.

[...]

Comprende, además, este capítulo, un interesante y prolijo estudio del gran estadista argentino Domingo Sarmiento que, a consulta de Matías Romero, examina el problema creado por los derechos

---

<sup>1</sup> *El Chamizal, Solución completa*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1963, lámina 4.

constitucionales del presidente de la Suprema Corte, la conducta de González Ortega y la prórroga del período gubernamental de Juárez, acordada por el gobierno. El texto inédito o cuando menos poco conocido, escrito en prosa fluida y elegante, es un valioso estudio sobre el problema de la suplencia de un jefe de Estado, que muestra la profundidad de los conocimientos de este valioso personaje argentino. Además, es visible su simpatía y preocupación por México.

# **DOCUMENTOS**



**Octubre y noviembre  
De 1866**

## SE INICIA EL LARGO LITIGIO DEL CHAMIZAL

Ciudadano ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación  
Presente

El gobernador de Chihuahua transcribe una comunicación de la jefatura de Bravos, relativa a las dificultades que se están ofreciendo por la variación del cauce principal del Río Bravo en su margen inmediata a la villa de El Paso (del Norte).

El ciudadano jefe político y comandante militar del distrito de Bravos, en oficio número 113, fecha 17 del actual, dice a la secretaría del gobierno de mi cargo lo que a letra sigue:

Desde el año de 1852 en que se marcaron los límites que en lo sucesivo dividirían a nuestra República de los Estados Unidos, se designó como línea divisoria el canal más profundo del río en la época en que se señalaron aquéllos y, para fijarlos, teniendo presentes las comisiones unidas de límites la variedad de la corriente del río, debida a la clase de terreno que forma su cauce, dispusieron señalar topográfica y astronómicamente aquél para lo que se hicieron multitud de observaciones astronómicas en toda su extensión por las dos comisiones y, principalmente, por la mexicana, que dejó situados en longitud y latitud del Picacho Antiguo, punto inicial, Muleros, El Paso (del Norte), San Elizario, Presidio Viejo, Presidio del Norte, San Carlos, etc., sólo con el objeto de relacionar estos puntos con el canal más profundo del río en aquella época, para que sirviera, como he dicho, de límite perpetuo entre ambas repúblicas.

La falsedad del terreno en que corre el río, ha hecho que en el transcurso del tiempo haya cambiado de corrientes en distintas partes y más notablemente abajo de San Elizario, a donde ha dejado todo el bosque que pertenece a aquel pueblo de esta parte y en esta villa, en el partido del Chamizal a donde se ha llevado más de 1,500 varas que antes eran propiedad de particulares y hoy son playas arenosas y tomillales que, según lo expuesto anteriormente, debían pertenecer a El Paso (del Norte), más los jefes de Franklin defienden este terreno como suyo, así como defienden también el que en otras partes ha dejado el río de este lado, como sucede en San Elizario; nosotros respetamos sus bosques que el río ha dejado de lado derecho y ellos los defienden también, porque estamos convencidos que les pertenecen y ellos no respetan ni reconocen por nuestro el terreno que el mismo nos ha quitado y ha dejado a la izquierda frente a Franklin.

Hoy nos amenaza y quizá el año entrante o menos tarde dividirá El Paso (del Norte) y quedará a la izquierda del río la mayor parte de la población. En esto caso ¿la parte que quede a la izquierda, pertenecerá a los Estados Unidos? Podrá ser también que el mismo río vuelva a tomar su antiguo cauce, el que tenía el año de 1850, y deje a la derecha los pueblos de la Isleta, Socorro y San Elizario; en este caso ¿tales poblaciones pertenecerán a México?

Hasta hoy sólo nosotros hemos respetado los límites que las comisiones respectivas fijaron y, por la otra parte, no se respeta nada.

Por lo que esta jefatura, considerando los males que el río pueda causar a esta población, había dispuesto sacar un canal en el terreno que antes estaba a la derecha y hoy está a la izquierda del río frente a esta Villa, para ver si era posible hacer que éste cambiara de curso y alejarlo de la población, haciendo que tomara otro cauce más distante de ella, aunque fuera por su mismo

terreno; mas las autoridades de Franklin no lo permiten, porque dicen que es ya de propiedades particulares y porque las mismas lo han repartido a varios vecinos, mientras que nosotros no podemos cortar ni palo en sus bosques que el río ha dejado de este lado, sin que nos embarguen nuestras carretas y bueyes y nos hagan pagar multas considerables.

Tales hechos, señor, pone en conocimiento de ese Supremo Gobierno la jefatura por el digno conducto de usted, para que se sirva dar conocimiento al ciudadano Presidente de la República y disponga lo que juzgue conveniente en el caso, pues puede suceder, sin duda, que si el río no se hace tomar por su antiguo cauce, dividirá El Paso (del Norte), como es muy probable que suceda perdiéndose esta población. Sirviéndose usted aceptar las seguridades de mi aprecio y distinguido respeto.

Tengo el honor de transcribirlo a usted, para que se digne acordar con el ciudadano Presidente de la República la resolución más conveniente, en el importante asunto de que trata la jefatura de Bravos.

Independencia, Libertad y Reforma. Chihuahua, octubre 31 de 1866.

Luis Terrazas

EL GOBIERNO NACIONAL PRECISA SU CRITERIO  
FRENTE A LOS CAMBIOS EN EL CHAMIZAL

Chihuahua, diciembre 5 de 1866

Al ciudadano Matías Romero,  
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario  
de la República Mexicana en los Estados Unidos de América  
Washington

Envío a usted copia anexa de una comunicación que me dirigió el ciudadano gobernador del estado de Chihuahua en 31 de octubre último, transcribiendo otra del jefe político del distrito de Bravos, fecha 17 del mismo mes, sobre las dificultades que están ocurriendo por la variación del cauce del Río Grande (Bravo), cerca de la villa de El Paso del Norte.

Por la importancia de este asunto, el ciudadano Presidente de la República encarga a usted lo exponga del modo conveniente a ese gobierno, atendiendo a las consideraciones expuestas por el jefe político del distrito de Bravos, a las constancias que debe haber en el archivo de esa legación, respecto del modo con que procedieron las comisiones de límites y a lo estipulado en el artículo 5º del tratado de 2 de febrero de 1848, sobre la permanencia de la línea divisoria entre las dos repúblicas, que no se alteró por el artículo 1º del tratado posterior de 30 de diciembre de 1853, en lo que se refiere al presente caso.

Si bien pudieran no deber considerarse los cambios insensibles causados por aluvión en las orillas del Río Grande (Bravo), no es posible dejar de considerar los cambios visibles e importantes causados por fuerza del río. Parece fundado en derecho y en las estipulaciones del tratado que, respecto de las porciones notables de terreno que lleguen a quedar en opuesta orilla por la fuerza del río, subsistan el dominio

eminente de la nación a que pertenecían y los derechos privados que hubiera sobre ellas.

Si ese gobierno conviene en estos principios y conforme a ellos está dispuesto a dar instrucciones a los funcionarios de los Estados Unidos en los distritos de la línea divisoria, parece que no sería necesario promover otra cosa por ahora; pero, en caso contrario, se servirá usted comunicarme cuales sean los principios de ese gobierno en el particular, para que pueda promoverse lo que fuera oportuno con motivo de los casos que ya han ocurrido y que fácilmente pueden seguir ocurriendo por la naturaleza del terreno en que corre el Río Grande (Bravo).

Protesto a usted mi muy atenta consideración.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

EL PROCURADOR GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DA SU OPINIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DEL RÍO BRAVO

Washington, 16 de noviembre de 1856

Honorable Robert McClelland,  
secretario del Interior

Señor:

La nota de usted de esta fecha, con que me comunica una cláusula de la minuta del informe que se proponen dar los comisionados para determinar los límites entre la República Mexicana y los Estados Unidos, da lugar a la siguiente cuestión de derecho público: Una parte de los límites la forma el Río Bravo que está sujeto a cambiar su curso de dos maneras; 1º por el aumento gradual de una de sus riberas acompañado en muchos casos de una disminución correspondiente en la ribera opuesta; y 2º por la acción más violenta del agua, que deja su cauce actual abriéndose uno nuevo en otra dirección. Cuando se verifica alguno de estos cambios en el lecho del río ¿cambia también la línea divisoria o permanece la misma donde se halla la corriente principal del río, según la representan los mapas adjuntos al informe de los comisionados?

La contestación a esta pregunta depende en parte de los términos del tratado que fijó la línea divisoria entre ambas repúblicas que, en lo conducente a esta cuestión, determina que la línea que comienza en el Golfo de México, a tres leguas de la tierra enfrente de la boca del Río Grande, continuará desde allí por en medio del río hasta cierto punto. Dispone además el tratado que unos comisionados elegidos por los dos gobiernos, determinarán y marcarán en la parte de tierra la línea estipulada, la que una vez convenida y establecida por ellos será

fielmente respetada, sin variación alguna, a no ser por expreso y libre consentimiento de entreambas repúblicas.<sup>2</sup>

Si la cuestión se versara sobre las porciones del límite que corren sobre paralelos de latitud, o en línea recta de punto a punto, es claro que los monumentos erigidos por los comisionados o la línea como se fija en otras partes por medio de palabras descriptivas y refiriéndose a objetos naturales o por medio de los mapas y diseños de los comisionados, sería cosa concluyente en cualquier tiempo a virtud de las estipulaciones del tratado. Esa sería la línea convenida y establecida, aun cuando resultara después, que, por error en los cálculos o en las observaciones astronómicas, se separaba del paralelo de latitud, cuando la línea se refiriera a él o en otras partes no formara exactamente línea recta.

Así es que, si en otras porciones del límite que se refieren a los ríos Gila y Colorado hubiera controversia sobre la identidad de uno de ellos - como sucedió en los límites del nordeste de los Estados Unidos, cuestionándose en aquella ocasión cuál era la verdadera St. Croiz- también en ese caso sería concluyente en todo tiempo, según el tratado, la determinación del punto por los comisionados.

Pero la cuestión actual es diferente y para (su) solución depende, en parte, de otras consideraciones.

En este caso, el límite no es una línea astronómica o geográfica sino un objeto natural definido por el tratado y aquí no hay equivocación entre dos objetos naturales distintos, a cada uno de los cuales convengan las palabras descriptivas de la estipulación. Se trata del Río Bravo que tiene un curso tan definido y casi tan falto de tributarios y de ramales en su corriente principal, como le sucede al Nilo. Este es un hecho que no pueden modificar ni los reconocimientos ni los informes.

Sin embargo, los principios establecidos del derecho público, vienen aquí (a) fijar la cuestión en todas sus relaciones.

Los respectivos territorios de los Estados Unidos y la República Mexicana son arcifines, es decir, territorios separados, no por una línea

---

<sup>2</sup> Tratado firmado el 30 de diciembre de 1853 sobre los límites entre México y los Estados Unidos, conocido como "Tratado de la Mesilla o de Gadsden". Puede consultarse en el tomo 3 de esta obra.



matemática sino por objetos naturales de una extensión natural indeterminada, los cuales, por sí solos, sirven para contener *-to keep off-* al enemigo.

Tales son las montañas y los ríos [Grocio de Barbeyrac, libro 11, capítulo 3, s. 16 y sexta; Areci Grotius Ilhestratus, *ibid*].

Cuando un río es límite entre dos territorios arcifines, los cambios naturales a que está sujeto o que su acción puede producir en la superficie del país, dan margen a varias cuestiones según los acontecimientos físicos que ocurren y la relación previa del río con los respectivos territorios.

La hipótesis más sencilla que cabe en la cuestión, es la de que el río pertenezca por convenio igualmente a los dos países, dividiéndose sus pertenencias de uno y otro lado por el *filum aquoe* o sea la medianía del canal que forma la corriente. Este es el hecho en nuestro caso. En tales circunstancias, cualesquiera cambios que ocurran en una u otra ribera, acrecentándose una o disminuyéndose otra; esto es, por la accesión gradual y casi insensible o por la abstracción de partículas, el río, según su curso, continúa siendo el límite. Con el tiempo un país puede perder un poco de su territorio, ganando un poco el otro; pero las relaciones territoriales no pueden alterarse por estas mutaciones imperceptibles en el curso del río.

El aspecto general de las cosas permanece sin cambiarse y la conveniencia de dejar que el río desempeñe el mismo papel, a pesar de estos cambios insensibles en su curso o en una y otra orilla, sobrepuja al inconveniente que resienta la parte que sufriera un detrimento que es gradual, no puede apreciarse en lo sucesivo.

Mas si el río abandonando su lecho primitivo se abre violentamente un nuevo cauce en otra dirección, la nación por cuyo territorio se precipita sufre, por la pérdida de territorio, un perjuicio mayor que el bien que importe la conservación del límite natural del río y la línea divisoria permanece en el lecho que el río ha abandonado.

Porque así como un pilar de piedra constituye un lindero, no porque es piedra sino por el lugar en que se halla, así también un río es límite entre dos naciones, no porque es agua corriente con cierto nombre

geográfico, sino porque corre en cierto cauce y dentro de determinadas riberas que son los verdaderos límites internacionales.

Tal es la regla recibida en derecho de gentes según la asientan los autores más acreditados [Sec. ex. gr. Puffend, Jus. Nat. Lib. IV, cap. 7, s. II; Gundling, Just. Nat. p. 248; Wolff, Jus. Gentium, ss. 106-109; Vattel, Droit des Gens, lib. 1, cap. 22 ss. 268-270; Stypmanni, Jus Marit, cap. V, ss. 476-552; Rayneval, Droit de la Nature, tomo I, pág. 307; Merlin Répertoire ss. voc. alluv.].

Pudiera multiplicar las citas sobre este punto de libros de derecho público. Mas para que, ya sea los Estados Unidos o la República Mexicana, quien quiera se sintiese desagradablemente afectado por la aplicación de esta regla se reconcilie enteramente con ella, me parece conveniente manifestar que está de acuerdo con el derecho común de ambos países.

Antes, sin embargo, aduciré como autoridad para los juristas y estadistas mexicanos una cita de las obras de derecho internacional de la autoridad más respetable en España y la América española.

Don Antonio Riquelme asienta esta doctrina -aquí siguen traducidos al inglés dos pasajes del *Derecho Internacional* de dicho autor, tomo I, pág. 83. El primero que comienza; "Cuando un río cambia su curso" hasta las palabras "predispone y consume". El segundo: "Pero cuando el cambio, etc."

Don Andrés Bello y don José María Pando, asientan esta doctrina en las mismas palabras: Sigue un párrafo que dice lo mismo con casi idénticas palabras y al fin esta cita: "Bello, Derecho Internacional, pág. 38; Pando, *Derecho Internacional*, pág. 99".

Almeda se refiere al mismo punto brevemente, pero en palabras decesivas -se traducen las palabras citándose al autor en su *Derecho Público*, tomo I, pág. 199.

Dejando ya las autoridades de esta clase, veamos lo que dicen los que discuten la cuestión en sus relaciones con los derechos privados y como doctrina de jurisprudencia municipal.

La doctrina nos vino de las leyes romanas. [Justinian, Inst. Lib. II, tít. I, ss. 20-24; Dig., Lib. XII, tít. I, L. 7: see. J. Voet ad Pandect, t. I, pág. 606-607; Heinec Recit, lib. II, tít. 2, ss. 358-369; Struvii Syntag, ex. 41 cap. 33-25; Bowyer's Civil Law ch. 14.].

Don Alfonso la trasladó del derecho civil a las partidas [1. 31, tít. 28, partida 3. Así llegó a ser una doctrina elemental del derecho español y del mexicano -Álvarez. Instituciones, lib. II, tít. 1, sec. 6; Asso Instits. p. 101; Gómez de la Serna, *Elementos*, lib. II, tít. 4, sec. 3, núm. 2; Escriche Dic. s, voces Accesion Natural, Aluvión, Avulsión; Febrero Mexicano, Tomo I, pág. 161; Sala mexicano edic. 1845, tomo II, pág. 62].

La misma doctrina partiendo del propio origen se abrió paso, por medio de Bracton, a la legislación de Inglaterra y luego de los Estados Unidos [Bracton de Legg. Angliae, lib. II, cap. 2, fol. 9; Blacks Comm, vol. II, pág. 262; Woolrych on Waters, p. 34; Angell on Water Courses, ch. 2; Lynch v. Allen, 4 De & Bat N.C.R. pág. 62; Murry v. Sermon, I Hawks, N.C.R. pág. 56; The King v. Lord Scarborough, III, B & C, p. 91; S. C. II Bligh N. S., pág. 147].

Tal es, sin controversia posible, el derecho público de la Europa moderna y de América; y tal es también el derecho municipal de la República Mexicana y de los Estados Unidos.

Por tanto, a mi juicio, el tenor del informe de los comisionados, en la cláusula que se ha sometido a mi examen, está en sustancia arreglado y si hubiera de modificarse para darle una absoluta exactitud, esto se obtendrá insertando alguna palabra o frase en que se reconociera la distinción que existe, en derecho, entre cambios graduales del curso de un río por accesión insensible y cambios que acaecen por la absoluta mutación de ese curso, produciendo separación de tierra de uno a otro territorio o abriendo parcialmente un nuevo cauce en uno u otro

territorio; lo que se indica puede ocurrir en alguna parte del curso del Río Bravo.

Tengo la honra de ser muy respetuosamente.

Caleb Cushing

MATÍAS ROMERO ACEPTA EL CRITERIO  
DE CALEB CUSHING

Washington, 6 de febrero de 1867

Al honorable William H. Seward, etc., etc., etc.

Señor secretario:

He tenido la honra de recibir la nota que se sirvió usted dirigirme con fecha de ayer, en respuesta a la mía de 9 de enero próximo pasado, con la que transmití a ese departamento copia de una comunicación del señor Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, relativamente a los cambios de cauce en el Río Bravo, en los límites entre México y los Estados Unidos. Con dicha nota me remitió usted copia del dictamen dado el 16 de noviembre de 1856 al departamento del interior por el honorable Caleb Cushing, a la sazón procurador general de los Estados Unidos, sobre este mismo asunto y cuyo dictamen, agrega usted, contiene los principios que profesa el gobierno de los Estados Unidos a este respecto.

He leído con interés ese dictamen y me ha parecido que los principios en él enunciados son equitativos y están fundados en las doctrinas de los más acreditados expositores del derecho internacional. Con esta misma fecha, trasmito a mi gobierno copia de aquél y de la nota de usted que me lo acompaña.

En el mencionado dictamen se hace la debida distinción entre el caso de que el cambio de las márgenes de un río que sirve de límite entre dos estados sea gradual o por aluvión sin que se cambie su dirección general y el en que tal cambio ocasionado por la fuerza del río sea súbito y completo y haga mudar su corriente. En el primer caso se considera que

el cauce actual del río sigue formando la línea divisoria y que el terreno agregado o perdido en cada ribera se adquiere o pierde para el estado a quien pertenece la ribera que ha sufrido tales mutaciones y en el segundo que la línea divisoria no puede seguir el nuevo cauce sino que permanece en el abandonado que el río tenía antes de la mutación violenta.

Al gobierno de México corresponde sin embargo expresar su conformidad o discrepancia con estos principios. Mientras recibo instrucciones sobre este punto que comunicaré a usted oportunamente no vacilo en aceptarlos entretanto como equitativos y razonables. Como el caso de que se quejó el gobernador del estado de Chihuahua y que sometí a usted con mi citada nota de 9 de enero próximo pasado, se encuentra decidido en el dictamen de Mr. Cushing, me tomo la libertad de suplicar a usted que este documento se comunique oficialmente a las autoridades de los Estados Unidos en Franklin, estado de Texas y principalmente a los jefes militares del Fuerte Bliss en el mismo estado, para que arreglen a él sus procedimientos, pues recordará usted que en el caso antes mencionado, al paso que consideran como propiedad de los Estados Unidos las porciones del territorio mexicano que el cambio de cauce del río Bravo ha dejado del lado izquierdo, no permiten que las autoridades mexicanas consideren como territorio mexicano el adquirido por el mismo principio, lo cual establece una desigualdad tan marcada, que determinó al gobierno mexicano a solicitar que los Estados Unidos expusieran los principios que deseen observar, para que se aplicaran con igualdad en ambos casos. El dictamen de 16 de noviembre de 1866 resuelve en el mismo sentido la cuestión del derecho particular que los individuos tienen a la propiedad de los terrenos que el cambio del río deja a una u otra de sus riberas, en cuyo punto también no han procedido con igualdad las autoridades de los Estados Unidos en Franklin y el Fuerte Bliss. No dudo, sin embargo, que cuando reciban el dictamen normarán a él sus procedimientos.

Me es muy satisfactorio esta oportunidad para renovar a usted, señor secretario, las seguridades de mi muy distinguida consideración.

Matías Romero

EL ARGENTINO DOMINGO F. SARMIENTO  
OPINA SOBRE LA CRISIS INTERNA  
DEL GOBIERNO DE MÉXICO

Nueva York, noviembre 16 de 1866

Señor don Matías Romero,  
plenipotenciario de México en Washington

Muy señor mío:

Con la mayor deferencia lleno, por medio de esta carta, el encargo que se sirvió usted hacerme de consignar, por escrito, las consideraciones a que en mi juicio se presta el hecho de presentarse el general (González) Ortega a título de presidente de la Suprema Corte de Justicia, reclamando de los decretos del señor Juárez, que prorroga el término de la presidencia hasta que pueda practicarse una elección.

Mi desconfianza procede de que existiendo casi siempre en nuestras constituciones disposiciones que carecen de precedentes en aquellas que por la sanción del tiempo han adquirido una racional jurisprudencia, se corre el riesgo de aventurar soluciones a las dificultades que la práctica ofrece, que pudieran ser tachadas de peregrinas, precisamente por lo peregrino del caso a que se refieren.

De desear sería que si los Estados Unidos de México recuperan nuevamente su usurpado territorio ajustasen su Constitución política a alguno de los autorizados y experimentados modelos que presenta el mundo, a fin de que, en casos como el presente, hubiera fuentes y autoridades donde acudir en busca de antecedentes y principios que dejaran satisfecha la conciencia pública.

¿No es un triste espectáculo el que presenta México a la víspera de sacudir el yugo de la dominación extranjera, dividido en cuanto a la inteligencia de un artículo de la Constitución, con dos poderes públicos en pugna y en inminente riesgo de arder en las llamas de una guerra fratricida? ¿No es de temer que ciudadanos honrados abracen indistintamente uno u otro partido, según que tales o cuales pretensiones cuadren mejor con sus ideas acerca de la importancia dispositiva de la Constitución, en lo que se refiere a la renovación de los poderes públicos?

Es de toda la América que fue española el que se susciten litigios sobre el sentido de ciertas disposiciones constitucionales, los que por falta de reglas claras de interpretación y de doctrinas que merezcan general asentimiento, han sido causa no pocas veces de guerra civil y deplorables trastornos. Sería, pues, de inmenso interés el fijar el espíritu de esas disposiciones constitucionales en México, por medio del esclarecimiento de los fines consultados en ellas y a ese resultado deseo contribuir con las siguientes someras consideraciones.

Todas las constituciones fijan un límite a la amplitud de las disposiciones que tienden a asegurar el ejercicio de los derechos individuales y es la preservación de la cosa constituida, el Estado, la nación. Ninguna disposición, pues, que tienda a consultar un interés o derecho particular, ha de poner en peligro la preservación del todo y es por esto que cuando se dispone que las sesiones de los congresos sean públicas, puesto que es prerrogativa del pueblo conocer las razones de la ley, se previenen que ellas podrán ser secretas, toda vez que razones de conveniencia pública lo requieran. Igual cosa sucede con el primero de los derechos del hombre, el de su libertad personal, cuya restitución le garante la Constitución toda vez que le sea suspendido sin notificación a la causa tenida por suficiente, conforme a las leyes, pues se previene que no se dé al preso la razón que motiva el acto, en casos de insurrección o invasión, cuando la seguridad pública lo exija.

La Inglaterra y los Estados Unidos reconocen estas limitaciones y otras que sería superfluo aducir, a los derechos conquistados en largos años y a costa de inmensos sacrificios. La seguridad pública, actualmente



amenazada en México, ha de ser, pues, la piedra de toque, mientras tal situación dure para probar el valor intrínseco de las disposiciones secundarias. La renovación del personal del Ejecutivo en períodos señalados, tiende a evitar el establecimiento, por el hábito o la coerción de un despotismo; pero esta precaución, loable en tiempo de paz, debe quedar como todas las otras, en caso de insurrección o invasión, subordinada al interés primordial de la salvación del Estado por medio de la fuerza. Estando bajo la ley marcial la parte de país libre y dominada la que ocupa el enemigo, las precauciones para renovar las autoridades quedan sin valor alguno, puesto que la elección no puede verificarse.

La Constitución de México dispone para el caso que ella misma ha creado por no tener un vicepresidente nombrado al efecto de una elección antes de expirar el término legal, que el Poder Ejecutivo sea interinamente ejercido por el presidente del Poder Judicial, distinguiéndose en esto de las constituciones de las demás repúblicas americanas que hacen recaer el gobierno en el jefe del Poder Legislativo. Es fácil comprender el espíritu de aquella disposición. Quiso ponerse el poder en manos de un funcionario que por sus funciones especiales es de suponer sea extraño a las cuestiones de partido, a fin de que se ejerza la menor presión posible sobre la libre manifestación de la opinión que ha de expresarse por el acto electoral.

La existencia de un presidente de la Corte Suprema supone residencia fija en la capital, desempeño diario de las funciones judiciales. ¿Pudo concebir la Constitución un presidente de la Corte que no presida Corte alguna, que no resida en el lugar en que tal corte se reúna? ¿Es un derecho personal el que el pueblo otorga a ese funcionario como el que confiere al vicepresidente? No; tal autoridad la ejerce el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus funciones, en el local designado a la época de dictarse la Constitución. El nombre del funcionario no entra por nada en este caso, mientras que en el presidente y vice el nombre es todo.

Dado este simple y racional antecedente, ¿puede haber un presidente de la Corte Suprema de México, en Nueva York o Nueva Orleans, en los Estados Unidos? ¿Puede emigrar la Corte Suprema y

funcionar fuera del territorio de su jurisdicción? El simple juez de Paz de Matamoros atravesando el Río Colorado, ¿puede ordenar prisiones o imponer multas en el territorio de la jurisdicción que abandonó?

El presidente de la Corte Suprema de que habla la Constitución ha de ser encontrado por el escribano en su puesto, siempre que éste tenga que notificarle un acto de su resorte. Si no lo hallare y supiere que el que desempeña diariamente aquella función en comunidad con los demás miembros de la corte, ha salido del territorio de la República, hará constar el hecho por diligencia, a fin de demostrar que está vacante el empleo, por cuanto éste es de tal naturaleza local y territorial, que no sigue al empleado fuera de la jurisdicción en que sus funciones han de ejercerse.

Si existe un punto constitucional solamente reconocido es, sin duda, el de la abdicación del empleo toda vez que el empleado sale del territorio de su jurisdicción. El derecho a gobernar la Inglaterra es propiedad de una familia, transmitido de padres a hijos por las leyes de sucesión y, sin embargo, cuando Jacobo II se ausentó del país, traspasando los límites de su reino, sin que a ello fuese llevado por el desempeño de sus funciones, el parlamento declaró vacante el trono y no llamó a ocuparlo al sucesor de Jacobo, por ser éste heredero de su padre muerto, no ausente. Si, pues, un rey deja de ser tal por el hecho de ausentarse de su país, ¿continuará un juez siéndolo después de años de no ejercer sus funciones y de residencia en el extranjero?

Debo llamar la atención a la observación que he hecho antes, a saber: que el funcionario llamado por la Constitución de México a ejercer en ciertos casos una especie de regencia en interregno, es el presidente del Poder Judicial y no del Legislativo, como en las demás repúblicas, es decir, un empleado cuyos deberes están donde reside el gobierno, que no puede ser gobernador de un estado general, de un ejército, emigrado ni embajador en país extraño, sin renunciar a la presidencia de la corte, cuya misión es reunirse todos los días a despachar las causas pendientes, únicas funciones del Poder Judicial.

Sería todavía de preguntar, ¿qué tiene de común esta disposición constitucional con el nombre del general (González) Ortega que aparece en el litigio funcionando desde tierra extranjera?

Y aquí viene las consideraciones que demuestran el peligro para la seguridad del país, que envuelve todo título o empleo conservado fuera de él. El que lo ejerciera estaría expuesto a las influencias de un estado extraño y alguna vez podría convertirse en instrumento de una política adversa a su patria y de ellos suministra una prueba el caso actual. El general (González) Ortega se encuentra contrariado en sus pretensiones por la política de los Estados Unidos favorable al Presidente Juárez. Si lo suponemos con derecho legítimo a la presidencia, tenemos que convenir en que la majestad de la República ha sido ajada en el acto de su prisión. Si nos colocamos en el caso contrario, de que la política de los Estados Unidos hubiese sido favorable al pretendiente, ya tendríamos en territorio extraño un presidente de México reconocido por un vecino poderoso que le daría su favor y hospitalidad y obrando en sentido favorable a los intereses de un país, que pudieran no ser siempre los de México.

Estas consideraciones me parecen de gran peso para resolver toda duda sincera acerca de la importancia de las disposiciones subsidiarias de la Constitución. No se trata, en el caso presente, de proceder a nuevas elecciones, porque tal cosa no es posible. No se trata de estorbar la prolongación de una tiranía, sino de continuar la resistencia contra una dominación extranjera y, para este objeto, la permanencia en el gobierno del personal que la comenzó y ha sostenido con éxito, es aconsejada por las más sencillas indicaciones del sentido común. "No conviene mudar caballos a la mitad del río", decía Lincoln en apoyo del buen sentido popular que lo reelegía para la presidencia, a fin de no perturbar las funciones de la máquina de guerra, que era entonces el Ejecutivo.

Para hacer valer sobre el hecho práctico, continuo, las altas cualidades militares del general (González) Ortega, a fin de mejorar con ellas la situación presente, sería preciso que por las elecciones así expresase creerlo el pueblo o suponer en defecto de las elecciones que el empleo de presidente de la Suprema Corte de Justicia presupone altas cualidades militares, puesto que la Constitución no nombra regente en

interregno al general (González) Ortega, sino a quien quiera que presida la corte a la época de la vacante. Y bien, según el espíritu de la Constitución, el único funcionario público que no puede ni debe ser llamado a la presidencia de la República, cuando ésta se encuentra en guerra de independencia, luchando brazo a brazo con un poder extranjero, es, sin duda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien debe suponerse muy versado en las leyes, muy equitativo en sus sentencias judiciales, pero en manera alguna apto para defender con la espada a su país amenazado. Acaso es México el único país de la tierra donde un general es presidente de un tribunal de Justicia Supremo. Acaso las eventualidades del destino hagan codiciable el empleo para hombres consagrados a la política militante, con lo que quedará viciada la Constitución judicial y burlado el objeto de la disposición constitucional que, buscando en el presidente de la corte una persona, por la naturaleza de sus funciones extraña a las preocupaciones de partido, encuentra un general prestigioso, a la mira, aguardando una oportunidad para encaramarse a la presidencia.

El Presidente Juárez, en ejercicio actual del poder, continúa la guerra con el título de presidente, lo que no constituye una teoría de derecho como la que se le opone, sino un hecho existente que sería necesario destruir, volviendo las armas que debieran emplearse contra el enemigo común, hacia el jefe del Estado, lo que daría por resultado seguro la siempre deplorable guerra civil y posible, aunque hipotético, el de la elevación del general (González) Ortega.

El hecho de no comprender los Estados Unidos los razonamientos en que se fundan las aspiraciones del pretendiente y de continuar reconociendo al gobierno del Presidente Juárez, si es indiferente para los partidarios de la literal interpretación de la Constitución, no lo es para el pueblo de México, ni para el éxito de la terrible guerra que sostiene gloriosamente. Salvar primero la cosa constituida, la patria, el Estado, la República, es lo que importa. Cada día trae su obra. Cuando haya de procederse a elecciones de presidente de México, independiente y libre, será regente en interregno el venerado jurisconsulto que acertare a desempeñar las funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia,

en ejercicio diario de sus deberes en la Ciudad de México. Desea que para entonces el general (González) Ortega mandase una legión victoriosa, pues por más violencia que me haga, no puedo imaginármelo sepultado entre viejos mamotretos de derecho.

El general (González) Ortega en los Estados Unidos está fuera del caso que la Constitución prevé. Será un general prestigioso, si se quiere, un político que encabeza un partido, pero no aquel presidente de la Suprema Corte de Justicia a quien la Constitución se proponía encargar del Poder Ejecutivo durante el período interregno. La historia ha probado cuáles han sido los desastres de las regencias durante la guerra y sería muestra de poquísima previsión de parte del pueblo de México, si a las inevitables añadiese una nueva, paralizando la acción del Ejecutivo actual, no para mejorar de situación, sino para llenar una simple ritualidad constitucional que no pudo ser calculada para circunstancias tan graves.

Acaso quedaría duda aún sobre si tiene o no facultad el Ejecutivo para prorrogarse en receso de la Cámara y ausencia o abdicación del presidente del Poder Judicial; pero esta duda se resuelve por la naturaleza permanente de aquél. Nuestras constituciones han hecho forzosa la reunión anual del Poder Legislativo. Alguna hay en los Estados Unidos cuyas sesiones son bienales y el parlamento inglés no hizo regular su convocación, difiriéndola cuando más a cinco años, sino en el reinado de Jacobo II. El Poder Ejecutivo sigue otras reglas. En las monarquías está previsto, por las leyes de sucesión y regencia, de personal para todas las eventualidades "Muerto el Rey, viva el Rey", es la fórmula consagrada para mostrar que no vaca un momento la acción ejecutiva. En las repúblicas se ha previsto a las posibles emergencias con el nombramiento de un vicepresidente y, en defecto de éste, con los presidentes sucesivos del Senado o los designados que señalan otras constituciones.

En el caso presente, en que no media muerte, renuncia o inhabilidad del ejecutante y en que no se puede convocar al pueblo a nueva elección, ningún interés fundado de la sociedad exige un cambio administrativo, que debilitaría la acción puramente militar del Ejecutivo, debiendo evitarse que las ritualidades de la Constitución, para los casos

ordinarios, comprometan la seguridad del Estado, que ha de quedar siempre a salvo.

Concluiré llamando la atención de usted a los perniciosos efectos de esas desviaciones de las prácticas de todas las naciones. La disposición de la Constitución, que llama al presidente de la Corte Suprema de Justicia a ejercer las funciones del Ejecutivo, no ha producido en la práctica el benéfico resultado que se esperaba, pues en lugar del juez imparcial se ha encontrado con un general con títulos, antecedentes y propósitos políticos lo que no pudo ni debió ser la mente de los que la crearon. Suprimir el interés y nombrar vicepresidente; he ahí a mi juicio lo que habría que hacer en previsión de futuras eventualidades.

Con mis votos por la felicidad de México y la personal de usted, quedo con sentimientos de particular aprecio, su afectísimo y seguro servidor y amigo.

Domingo F. Sarmiento